



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL

Santiago de Cali, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO
DEMANDANTE	HERMES CARREÑO CORTES abogadaliliatt@hotmail.com
DEMANDADO	DISTRITO DE BUENAVENTURA
RADICACIÓN	76109-33-33-002-2015-00191-01

1.- ASUNTO

Procede el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión Oral conformada por los doctores **JHON ERICK CHAVES BRAVO**, **FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ** y **RONALD OTTO CEDEÑO BLUME** a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la parte ejecutante contra el auto interlocutorio No. 620 del 03 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, a través del cual modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

2.- AUTO APELADO

Mediante auto interlocutorio No. 620 del 03 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, se resolvió modificar la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante tras considerar que, dentro del monto a reconocer y pagar en favor del señor **HERMES CARREÑO CORTES** por concepto de salarios y prestaciones sociales adeudados, debe descontarse lo correspondiente a aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues ello no depende de la prestación del servicio como tal, sino que está sujeto al vínculo laboral, que según las sentencias objeto de ejecución, nunca se interrumpió.

Además, consideró que en la liquidación efectuada por la entidad ejecutada no se tuvieron en cuenta 15 días de salario del mes de septiembre de 2013 y, los intereses moratorios no debían contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, sino a partir del 17 de septiembre de 2013, esto es, desde el día siguiente a aquél en que el ejecutante fue reintegrado al servicio.

En virtud de lo anterior, el juez *a quo* determinó que la liquidación del crédito sería de la siguiente forma:

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76109-33-33-002-2015-00191-01
DEMANDANTE:	HERMES CARREÑO CORTES
DEMANDADO:	DISTRITO DE BUENAVENTURA

Por concepto de capital:	\$150.333.540
Intereses de mora (17/09/2008 a 01/11/2016)	\$122.099.977
Nuevo saldo:	\$272.433.517 ¹ .

3.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

Inconforme con esa determinación, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación argumentando que no es de recibo efectuar ningún tipo de descuento, pues las providencias constitutivas de título ejecutivo no lo ordenaron y no le es dable al juez de ejecución efectuarlos. Al respectó señaló que, la posición del juez *a quo* desconoce jurisprudencia según la cual el pago de salarios y prestaciones sociales en casos como el *sub lite*, se realiza a título de compensación por el daño sufrido.

También aseguró que, esta no es la oportunidad procesal idónea para modificar el mandamiento de pago, el cual quedó ejecutoriado y en firme al no haber sido objeto de recurso alguno. Además, precisó que las alteraciones u objeciones deben hacerse conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago.

De otra parte, adujo que la liquidación objeto de análisis desconoció el periodo de 20 días correspondientes al mes de marzo, pues el actor fue desvinculado del servicio el 12 de marzo de 2008 y no desde el 1° de abril de dicho año.

Además, consideró que el juez de primera instancia erró en el cálculo de los intereses moratorios, pues estos deben calcularse desde la ejecutoria de la sentencia declaratoria y no a partir de la fecha de reintegro del hoy ejecutante, pues ello significa dejar a merced de la entidad ejecutada la causación de los mismos. Finalmente, adujo que los porcentajes de la tasa de usura tenido en cuenta en el auto recurrido no son los correctos y en consecuencia, generó unos valores que no corresponden y perjudican al ejecutante².

4.- PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar o no a confirmar la liquidación del crédito establecida por el Despacho de primera instancia, para lo cual deberán dilucidarse los siguientes aspectos: i) si los descuentos para salud y pensión deben aplicarse al presente asunto; ii) si en dicha liquidación es posible modificar el mandamiento de pago; iii) determinar si en los cálculos efectuados se desconocieron 20 días correspondientes al tiempo total en que el ejecutante estuvo desvinculado del servicio; y iv) establecer desde cuándo corren los intereses moratorios y cómo debe efectuarse su liquidación.

5.- TESIS DE LA SALA

La Sala modificará la decisión adoptada por el juez de primera instancia tras concluir que, lo procedente es liquidar el crédito del presente asunto en los siguientes términos: i) para efectos de calcular el capital adeudado, deberá

¹ Folio 27 a 29.

² Folio 30 a 35.

liquidar salarios y prestaciones sociales adeudados desde el 1º de abril de 2008 hasta la fecha de reintegro efectivo, deduciendo lo pertinente por concepto de descuentos a salud y pensión; y ii) la causación de intereses moratorios se debe calcular dando aplicación al artículo 177 del Decreto 01 de 984, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en consonancia con el concepto No. 2006022407-02 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

6.- CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CASO

Previo a estudiar de fondo las inconformidades expuestas por la parte recurrente, es preciso puntualizar que a través de sentencia No. 018 del 07 de febrero de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura declaró la nulidad del Decreto No. 112 del 12 de marzo de 2008 y en consecuencia, ordenó al **DISTRITO DE BUENAVENTURA** que reincorporara al señor **HERMES CARREÑO CORTES** sin solución de continuidad al mismo cargo que ocupaba cuando fue retirado del servicio, o a uno de igual o superior categoría. Adicionalmente, dispuso el pago de salarios y prestaciones sociales causadas dejados de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro efectivo³.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, a través de sentencia No. 078 del 26 de abril de 2012⁴.

6.1. Ahora bien, en primer lugar debe señalarse que los descuentos en materia de salud y pensión tienen fundamento normativo, es decir, aplican por disposición legal. Al respecto, recuérdese que la Ley 100 de 1993 regula lo pertinente en sus artículos 160 y 161, así:

“ARTÍCULO 160. DEBERES DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS. Son deberes de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los siguientes:

(...)

3. Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar.

ARTÍCULO 161. DEBERES DE LOS EMPLEADORES. Como integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:

(...)

2. En consonancia con el artículo 22 de esta ley, contribuir al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante acciones como las siguientes:

a) Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el artículo 204.

b) Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a los trabajadores a su servicio;

c) Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la Entidad Promotora de Salud, de acuerdo a la reglamentación que expida el gobierno”. (Destacado de la Sala).

³ Folio 1 a 12.

⁴ Folio 14 a 23.

Adicional a lo anterior, revisado el escrito de subsanación⁵ de demanda presentado por la parte ejecutante se advierte que, en aquella oportunidad dicho extremo procesal consideró que sí era procedente efectuar el descuento por concepto de pensión y se opuso únicamente al descuento en salud por la no prestación del servicio durante el tiempo que perduró la desvinculación.

Al respecto debe precisar la Sala que no es de recibo el argumento del hoy recurrente en cuanto a que no deben efectuarse los descuento de ley - pensión y salud- por no haberse ordenado expresamente en las sentencias base de ejecución, pues dicha deducción no opera por orden judicial, sino que tal y como se indicó en precedencia, obedece al imperio de la Ley que así lo dispone, sin que para ello sea determinante la prestación o no del servicio de salud, pues ello no es presupuesto necesario para materializar el descuento.

Al respecto téngase en cuenta además que según el artículo 157 de la ley 100 de 1993, existen dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud: los del régimen contributivo y los del régimen subsidiado. Dentro del primer grupo, que atañe al caso que nos ocupa, se encuentran incluidas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.

Entonces, la obligatoriedad de la cotización en salud deriva de la citada preceptiva legal en consonancia con los ya citados artículos 160 y 161 de la Ley 100 de 1993 referentes a las obligaciones de los afiliados y empleadores.

Así las cosas, debe concluirse que en la liquidación del crédito objeto de litigio deben efectuarse las deducciones respectivas por concepto de salud y pensión.

6.2. Ahora, con relación a la posibilidad de que en la liquidación del crédito se pueda o no modificar lo dispuesto en el mandamiento de pago, debe traerse a colación lo dispuesto recientemente por el Consejo de Estado:

*"A su turno, el Consejo de Estado en diversas oportunidades ha analizado la anterior disposición, en consonancia con el artículo 430 del Código General del Proceso y la facultad de saneamiento prevista en el artículo 42 ibidem, concluyendo que **el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.** Esta conclusión se ha fundado en los siguientes razonamientos:*

(...)

*ii) **En la etapa de revisión de la liquidación del crédito** que presenten las partes (artículo 446 del Código General del Proceso), **el juez puede aprobarla o modificarla.** A su vez, «este trámite no puede llevarse a cabo antes de que se surtan los pasos que la ley ha previsto para el proceso ejecutivo»⁶."*

⁵ Folio 116 a 117.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: **RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS**, providencia fechada el veintiocho

Así las cosas, a juicio de la Sala es evidente que el argumento del recurrente frente a este puntual aspecto no es de recibo, pues conforme el artículo 446 del Código General del Proceso y la citada jurisprudencia, el mandamiento de pago puede ser válidamente modificado en la liquidación del crédito conforme los elementos de juicio que obren en el plenario.

6.3. En cuanto a la fecha a partir de la cual debe efectuarse la liquidación, es preciso indicar que si bien en las sentencias constitutivas del título ejecutivo se dispuso que el aquí ejecutante debía ser reintegrado al cargo desde el momento en que fue retirado del servicio **-12 de marzo de 2008-**, lo cierto es que en el escrito de subsanación de la demanda, el apoderado judicial del aquí ejecutante reconoció en forma expresa que la administración distrital reconoció salarios al ejecutante hasta el **30 de marzo de 2008**, indicando además, que era viable efectuar la liquidación respectiva desde el 1° de abril de 2008⁷.

En este orden de ideas, se tiene que en atención a lo expuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutante con base en información suministrada directamente por el señor **HERMES CARREÑO CORTÉS**, lo correcto es efectuar la liquidación de salarios y prestaciones sociales adeudados desde el 1° de abril de 2008.

6.4. Finalmente, en lo que se refiere a la liquidación de los intereses moratorios la Sala debe hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, al tratarse de un proceso cuya demanda se presentó antes de la vigencia de la ley 1437 de 2011 y cuya sentencia también se dictó en tales condiciones, los intereses de mora por el retardo en el pago se causan de conformidad con el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentencia⁸.

En segundo lugar, frente a la fecha a partir de la cual deben liquidarse dichos intereses la Sala considera que, no le asiste razón al juez de primera instancia al haber determinado que los mismos se causan desde el día siguiente a aquél en que se hizo efectivo el reintegro del actor, pues ello no se ajusta a lo dispuesto en el citado artículo 177 del Decreto 01 de 1984 que prevé y regula la causación y el pago de los intereses moratorios.

Además, tampoco se comparte la apreciación de que ello se hace en atención a lo ordenado en el mandamiento de pago, pues verificado el auto interlocutorio No. 014 del 13 de enero de 2016⁹ se advierte que desde aquella oportunidad se dispuso que los intereses moratorios se liquidarían conforme el Decreto 01 de 1984, normatividad que rigió el proceso ordinario y que se reitera, dispone la causación de dichos intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia

(28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso identificado con la radicación número: 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16).

⁷ Folio 116.

⁸ Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. **ENRIQUE GIL BOTERO**, sentencia fechada el 20 de octubre de 2014, dentro del expediente identificado con la radicación No. 52001-23-31-000-2001-01371-02(AG).

⁹ Folio 121 a 122.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76109-33-33-002-2015-00191-01
DEMANDANTE:	HERMES CARREÑO CORTES
DEMANDADO:	DISTRITO DE BUENAVENTURA

Por último, en la liquidación de los aludidos intereses moratorios deberá tenerse en cuenta la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

6.5. En conclusión, la Sala modificará el auto recurrido y en su lugar dispondrá que el juzgado de primera instancia debe liquidar el crédito del presente asunto en los siguientes términos: i) para efectos de calcular el capital adeudado, deberá liquidar salarios y prestaciones sociales adeudados desde el 1º de abril de 2008 hasta la fecha de reintegro efectivo, deduciendo lo pertinente por concepto de descuentos a salud y pensión; y ii) la causación de intereses moratorios se debe calcular dando aplicación al artículo 177 del Decreto 01 de 984, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en consonancia con el concepto No. 2006022407-02 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

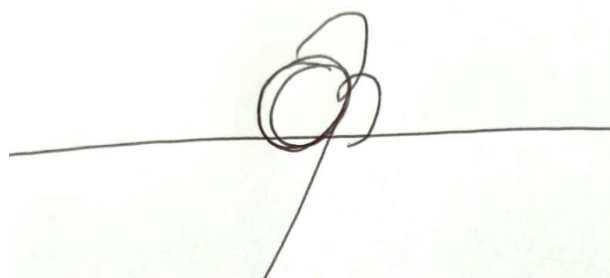
RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el auto interlocutorio No. 620 del 03 de noviembre de 2016 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura y en su lugar, **ORDENAR** al juez *a quo* liquidar el crédito del presente asunto en los términos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

JHON ERICK CHAVES BRAVO



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado